



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA CIVIL

Medellín, nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2.023)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 005 2022 00297 02

Proceso: Ejecutivo
Demandante: PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S.A.
Demandada: FILLING COLOMBIA S.A.S..
Extracto: Confirma en cuanto las medidas cautelares dispensadas se avienen al ordenamiento jurídico.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de alzada propuesto por la demandada, contra el auto calendado el diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín¹.

ANTECEDENTES

El 10 de octubre de 2.022 la actora deprecó medidas cautelares, a las que el *a quo* accedió a través del auto recurrido, disponiendo embargar: (i) el inmueble de Matrícula Inmobiliaria 01N-5059909; y, (ii) los dineros que la demandada tuviera en las siguientes cuentas bancarias:

¹ Archivo 117 principal.

Entidad	Tipo de cuenta	Número
Bancolombia	Corriente	900004109
	Ahorros	480166686
	Ahorros	790000411
Serfinanza S.A	Corriente	000022069
Banco de Bogotá	Ahorros	393217757

Esta última cautela la limitó *“hasta la suma de Seiscientos Cincuenta Millones de Pesos M.L. (\$ 650.000.000).”*.

Frente a lo anterior la demandada presentó los recursos de reposición y apelación, argumentando que pagó el capital de cinco (5) de las seis (6) facturas en cobro, específicamente las numeradas 082210, 082690, 082901, 082986, 083342, por valor de \$156´651.326.oo, quedando por pagar la factura 083100 por \$235´652.774.oo, lo que la ejecutante aceptó al pronunciarse sobre las excepciones de mérito.

Entonces, que tales embargos debieron limitarse al último valor y no como se hizo (\$650´000.000.oo), lo cual sería razonable y proporcional según el artículo 599 del C. G. del P., pues de continuarse con lo dispuesto conllevaría al cierre de su empresa, ya que una de las cuentas embargadas (Bancolombia ahorros 790000411 que corresponde a la 379-000041-10), es de nómina, a través de la cual paga el salario y seguridad social a 59 empleados, de los cuales 27 son madres y padres cabeza de familia.

De esa manera, pidió limitar el monto de la medida al valor actual de lo debido, y liberando la cuenta de nómina².

En auto del 14 de junio hogaño el *a quo* indicó que no está acreditado que los embargos sean excesivos para el cumplimiento de las

² Archivo 120.

pretensiones, por lo que no hay lugar a levantamientos; sin embargo, considerando el abono de \$156'651.325.00 efectuado por el ejecutado y reconocido por el ejecutante al contestar las excepciones, a la luz del artículo 593.10 del C. G. del P., redujo la cantidad a embargar a \$390'000.000.00, aunque concedió la alzada³.

Así las cosas, tratándose de providencia apelable según lo normado por el artículo 321.8 del C. G. del P., y agotada la prueba de oficio decretada⁴, se resuelve el recurso, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, ello dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 procesal civil⁵.

Respecto a las medidas cautelares, su objeto es asegurar, conservar o anticipar la efectividad de los derechos que eventualmente puedan reconocerse en una decisión jurisdiccional⁶. Particularmente, sobre las

³ Archivo 121.

⁴ El 17 de julio de 2023, de oficio, se decretó el recaudo de lo siguiente: “1. *Certificado de Libertad y Tradición del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 01N-5059909, expedido dentro del mes anterior.*”, y “2. *Documentos que sumariamente acrediten el valor del inmueble aludido en el numeral anterior (v. gr. experticias, avalúos, recibos liquidatarios o de pago del impuesto predial).*”. De lo documental arrimado, se corrió el respectivo traslado. Ver archivos 02, 04 y 05 del Cuaderno “02SegundaInstancia”.

⁵ El citado artículo reza en su parte pertinente; “*El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley*”.

⁶ La Corte Constitucional ha dicho que las medidas cautelares garantizan; “... *el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado*”. (Sentencia T 172 de 2016).

cautelas en asuntos ejecutivos el artículo 599 del C. G. del P. en su inciso 3° indica:

“El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.”. Subraya adrede.

Tratándose de embargos a sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios, el artículo 593.10 procesal civil, establece:

“10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

Y, respecto a la reducción de embargos el artículo 600 ídem explica:

“Reducción de embargos. En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados.”.

En el caso ejecutivo que nos ocupa, ciertamente la demanda se presentó cobrando seis (6) facturas⁷, las que sumadas en su capital

⁷ Son las siguientes:

- PLZF 082210, por \$59'577.342.00 más intereses de mora desde el 3 de julio de 2.022.
- PLZF 82690, por \$38'515.313.00, con intereses de mora a partir del 25 de julio de 2.022.
- PLZF 82901, por \$18'918.621.00 , e intereses de mora desde el 7 de agosto de 2.022.
- PLZF 82986, por \$30'029.034.00 e intereses de mora desde el 13 de agosto de 2.022.
- PLZF 83342, por \$ 9'610.963.00 con intereses de mora desde el 3 de septiembre de 2.022.
- PLZF 83100, por \$235'652.774.00 más intereses de mora desde el 21 de agosto del 2.022.

totalizan \$392'303.777.00., de lo que el ejecutado dijo que pagó \$156'651.326.00, aduciendo que corresponde a las facturas de venta plzf82210, plzf82690, plzf82901, plzf82986, plzf83342, fundamentando la excepción de pago respecto a esos títulos; y, en cuanto a la factura PLZF83100, cuestionó el negocio jurídico que la originó.

El citado abono fue reconocido por el ejecutante al pronunciarse sobre las excepciones, precisando que aún se debe el interés moratorio de cada título, por lo que puede entenderse que en el proceso aún debe resolverse sobre un capital de \$235'652.451.00, más los intereses de cada documento, los que aseguró que todavía se adeudan.

Atendiendo a lo anterior, y previa solicitud de la demandante, el *a quo* embargó el inmueble 01N-5059909, así como los dineros de varias cuentas bancarias, tal como se expuso líneas atrás.

Para determinar si las cautelas son excesivas, de oficio se decretó prueba para el últimas acreditar el valor del predio cautelado, allegándose certificado de Libertad y Tradición solicitado del mismo, así como la correspondiente factura de impuesto predial, de lo que se corrió el respectivo traslado⁸.

De tal probanza se corrobora que FILLING COLOMBIA S.A.S. tiene el 4% del respectivo derecho de dominio, el que tiene un valor catastral de \$3'862.880.00 según consta en la factura de *"impuesto predial unificado"*, sin que nada se expusiera sobre su precio comercial; entonces, no alcanza para la limitación prevista en el artículo 599 ídem, la cual procede cuando las cautelas exceden el *"doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas"*.

⁸ Ver archivos 02, 04 y 05 del Cuaderno *"02SegundaInstancia"*.

Tampoco se advierte viable la reducción dispuesta en el artículo 600 ídem, pues no sólo requiere que se doble el crédito, sino también la consumación del embargo y secuestro, lo cual no se ha acreditado.

En ese sentido y considerando el documento que está en recaudo, los embargos dispuestos no resultan desproporcionados; y si bien el numeral 6° del artículo 594 del C. G. del P., deja en claro que “*Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.*”, poniendo a estos en condición de “*bienes inembargables*”, ello refiere a cuando los recursos son propiedad del demandado.

Entonces, basta hacer una interpretación armónica con las demás normas procesales civiles regulatorias de las cautelas (v. gr. artículo 597.3 C. G. del P.), junto con los artículos 154 al 156 del Código Sustantivo del Trabajo, para colegir que mientras los dineros del empresario no pasen al dominio de los destinatarios representando salarios y prestaciones sociales, la cuenta de donde salen los recursos no puede considerarse, precisamente, en tales categorías para que las cobije la inembargabilidad.

En esos términos no es factible excluir de las cautelas la cuenta ahorros 379-000041-10 de la entidad financiera BANCOLOMBIA, cuya titular es la hoy ejecutada, sin perjuicio que si lo embargado en las otras cuentas de la accionada fuera monto suficiente para limitar la medida, se pueda proceder de conformidad.

Como conclusión, en las medidas decretadas no se oteó exceso, ni que ninguno de los bienes sobre los que se dispuso resulten inembargables, razón por la cual se confirmará la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado el auto objeto de apelación, conforme lo motivado. Sin costas.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo.

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Bohórquez Vidueñas', is positioned above the printed name of the magistrate.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO